



► En el Frente Amplio de todos modos acordaron una reunión con los ministros Jorge Quiroz (Hacienda) y José García (Segpres) para el próximo lunes, en La Moneda.

Oposición acusa vicios de constitucionalidad en megaproyecto y se prepara para acudir al TC

A pesar de la ofensiva de la izquierda, el gobierno se anotó dos triunfos de cara a la tramitación del proyecto: lograr sumar al debate al Partido de la Gente y conseguir que la iniciativa solo se discuta en tres comisiones.

Nicolás Quiñones

Apenas el gobierno ingresó el proyecto de Reconstrucción Nacional a la Cámara de Diputados, en la oposición se encendieron las alertas.

En medio de la reunión de comités que se producía a esa hora y a pocos minutos de que empezara la sesión de sala, los representantes de las distintas bancadas de oposición embistieron contra la iniciativa gubernamental, acusando una serie de vicios de constitucionalidad, es decir, normas que, a juicios de los parlamentarios de ese sector, no se ajustan a lo que dicta la Carta Fundamental. Por esto mismo es que advirtieron que acudirán al Tribunal Constitucional (TC).

A pesar de esta arremetida, el gobierno cuenta con viento a favor, pues durante la mañana de este miércoles logró sumar a la bancada del Partido de la Gente, que votará a favor de la idea de legislar. Así, planteará sus aprensiones en la discusión en particular.

El otro punto a favor que se anotó el gobierno es que en la votación en que la Cámara de Diputados definió el curso de

la tramitación, se resolvió que, además de la Comisión de Hacienda, la iniciativa gubernamental pasará por las instancias de Medio Ambiente y Trabajo.

Con ello, La Moneda se asegura tener un debate acotado, pues en el espacio de Trabajo se discutirán solo dos artículos del proyecto.

En ese contexto, distintos diputados de oposición activaron una ofensiva constitucional por distintos puntos del proyecto.

El diputado Luis Cuello (PC), argumentó que su reserva se fundamenta en una infracción al artículo 8° de la Constitución, que consagra el principio de probidad en la función pública.

“Es bastante claro que este proyecto de ley de superricos que ha presentado el gobierno no solamente beneficia a los amigos del gobierno, no solamente beneficia al grupo Luksic y al grupo Angelini, sino que beneficia directa y económicamente a varios de sus ministros: el ministro Barros, el ministro Pérez Mackenna, el ministro Quiroz, el ministro Daniel Mas. Es decir, son ministros que tienen altos patrimonios, que tienen empresas, sociedades que han sido declaradas públicamen-

te”, sostuvo Cuello.

Y añadió: “Eso infringe de forma abierta un principio constitucional que es el principio de probidad, que está en la Constitución, está en el artículo octavo”.

Por el lado del Frente Amplio, el diputado Jorge Brito afirmó que objetarán el artículo 12 del proyecto de ley, que aborda el mecanismo de recaudación de los municipios.

“La Constitución establece que se prepondera un desarrollo equitativo que se rompe, quitándole el financiamiento al 90% de las comunas del país”, afirmó Brito.

En el Frente Amplio, en todo caso, acordaron una reunión con los ministros Jorge Quiroz (Hacienda) y José García (Segpres) para el próximo lunes en La Moneda.

Desde el PPD, Jaime Araya afirmó tajantemente que “le daremos un portazo porque es un regalo de casi 4 mil millones de dólares a los más ricos”.

“Las primeras palabras del Presidente Kast son la rebaja del impuesto corporativo. Va contra lo que piensa el 63% de los chilenos, que no está de acuerdo con bajar los impuestos a los más ricos ni a los

grandes grupos económicos, este proyecto busca bajar del 27% al 23% el impuesto de primera categoría”, complementó Araya.

El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, aseguró que todas las bancadas de oposición harán un trabajo coordinado para poder recurrir al Tribunal Constitucional.

La idea, aseguró Leiva, es recurrir al TC “no respecto del fondo, sino porque este proyecto consulta garantías individuales, particularmente el artículo cuarto de la Constitución”.

“Esto avanza mucho más allá que el decreto ley seiscientos del año setenta y cuatro, dictada por la dictadura, sino que no es solo respecto a inversión extranjera, sino que también respecto a inversión interna”, complementó Leiva.

“Eso es total y absolutamente, no solo antidemocrático, sino que inconstitucional. El ejercicio de la soberanía, establece el artículo cuarto de nuestra Constitución, reside en las autoridades elegidas, y el Congreso Nacional perfectamente puede modificar la Constitución y el régimen tributario”, argumentó el jefe de bancada socialista. ●